Administración respecto de la Dehesa Marisancho, recurrida esta última resolución administrativa ante la Sala, dictó sentencia 543/2002 de 22 de marzo, en que se ratificaba la resolución administrativa impugnada del TEAC".

El artículo 9 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia nº 1032, de 29 de junio de 2004 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictada en el recurso contencioso administrativo nº 1026/2002 y 1242/2002 acumulados, llevando a puro y debido efecto el fallo cuya parte dispositiva dice:

"Que en atención a lo expuesto debemos desestimar y desestimamos los recursos contencioso administrativos interpuesto por Don Pedro Sánchez de Diego de la Riva por sí y, además en representación de Doña María Amparo Fernández de la Riva Varela de Limia, Don Manuel, Don Carlos, Don Fernando, Don Álvaro y Doña Ana Sánchez de Diego Fernández de la Riva, y la Junta de Extremadura contra la resolución del TEAC de 22 de mayo de 2002 a que se refieren los presentes autos y en su virtud la debemos de ratificar y ratificamos por ser conforme a Derecho y todo ello sin expresa condena en cuanto a costas".

Mérida, a 8 de octubre de 2004.

El Consejero de Hacienda y Presupuesto,
JOSE MARTÍN MARTÍN

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2004, del Consejero de Hacienda y Presupuesto, por la que se dispone la ejecución de la sentencia nº 1039 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso administrativo nº 1115/2002.

En el recurso contencioso administrativo nº 1115 de 2002 promovido por Urbanización y Viviendas de Cáceres, S.A., siendo demandada la Administración General del Estado y la Junta de Extremadura, recurso que versa sobre: "Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura, recaída en reclamación número 06/2808/00 sobre Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados".

El artículo 9 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

R E S U E L V O

Proceder a la ejecución del fallo de la sentencia nº 1039, de 30 de junio de 2004 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dictada en el recurso contencioso administrativo nº 1115/2002, llevando a puro y debido efecto el fallo cuya parte dispositiva dice:

"Que en atención a lo expuesto debemos de estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesta por URVICASA contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Extremadura de 31/05/2002 a que se refieren los presentes autos y en su virtud la debemos de anular y anulamos por no ser conforme a Derecho, anulando las liquidaciones números TC/CP 8000020012950 y 8000020012941 a que se refieren los presentes autos, condenando a la Administración a la devolución de las cantidades ingresadas junto con los intereses correspondientes, desestimando la petición de nulidad de la disposición general y todo ello sin expresa condena en cuanto a costas".

Mérida, a 8 de octubre de 2004.

El Consejero de Hacienda y Presupuesto,
JOSE MARTÍN MARTÍN

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2004, del Consejero de Hacienda y Presupuesto, por la que se dispone la ejecución de la sentencia nº 1090 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso contencioso administrativo nº 1642/2002.

En el recurso contencioso administrativo nº 1642 de 2002 promovido por Automoción Ancoex, siendo demandada la Administración General del Estado y como codemandado la Junta de Extremadura, recurso que versa sobre: "Resolución del Tribunal